Bandera Socialista

Organo del Partido Revolucionario de los Trabajadores

Número 197, año V $5.00 20 de julio de 1981

19 y 26 de julio, aniversarios de dos revoluciones victoriosas

Cuba y Nicaragua: el camino de América Latina

¡Cuba sí, yanquis no!

El próximo 26 de julio se cumplen veintidós años desde que el pueblo cubano asestara uno de los golpes más contundentes que se han propinado al gigante imperialista de norteamérica. La revolución cubana no sólo ha demostrado su fortaleza y su coraje en el hecho de que, siendo Cuba un pequeño país a sólo 200 millas de Estados Unidos, haya expulsado al imperialismo yanqui de su territorio y establecido el primer estado obrero en este continente; además, es una revolución que se ha mantenido viva durante ya más de dos décadas y que ha logrado avances sociales que no tienen paralelo en ningún otro país de nuestro continente, ni siquiera en el propio Estados Unidos, si se toma en cuenta el tamaño de la isla y el tiempo en que ha logrado tan significativas conquistas.

En efecto, en poco más de veinte años de revolución, Cuba ha logrado que toda la población cuente con atención médica, con educación, con alimentación y vestido, con trabajo, etc., a pesar incluso del furioso bloqueo y el boicot orquestado fundamentalmente por el imperialismo norteamericano. Al constituirse en un ejemplo de lo que puede hacerse en una sociedad en la que lo que importa no son las ganancias de unos cuantos, sino las necesidades de la población, Cuba se ha vuelto un insoportable estorbo para el imperialismo norteamericano.

Esta es una de las razones de que los imperialistas hayan tratado, en cuanta oportunidad ha estado en sus manos, de crearle problemas al pequeño país del Caribe. Han ido desde la organización de complots contra sus dirigentes, pasando por la introducción de plagas a la isla, hasta la formación de ejércitos mercenarios organizados con el propósito de invadir al país. Más aún, durante la llamada "crisis de los cohetes", Washington amenazó con barrer del mapa a Cuba mediante un ataque nuclear.

Pero nada de esto ha logrado frenar los avances de la revolución cubana, y no sólo en el terreno de las conquistas nacionales. Desde el principio, la revolución cubana ligó su destino al de la revolución latinoamericana, como lo demostraron las acciones del "Che" Guevara en Bolivia. Independientemente de los errores que se puedan haber cometido en el proceso, es claro que la dirección cubana contempla su

(Pasa a la página 4)



En ambos extremos, Daniel Ortega —comandante sandinista— y Fidel Castro —Comandante en Jefe de Cuba. Cuba y Nicaragua son el ejemplo viviente de cómo es posible derrotar al imperialismo y alcanzar importantes conquistas sociales. Al centro, Maurice Bishop, dirigente de otra revolución triunfante.

Nicaragua en los umbrales de un cambio radical

Por Margarito Montes Parra

El próximo 19 de julio, un día antes de que aparezca este artículo, la revolución nicaragüense habrá cumplido dos años de su histórica victoria sobre la oprobiosa dictadura somocista y sus amos, los imperialistas norteamericanos. La lucha contra la estirpe sangrienta que durante cuarenta años monopolizó el poder y, a fuerza de hundir al país en la barbarie, amasó una de las fortunas más grandes jamás acumuladas en toda Centroamérica es ya legendaria. Pero la revolución nicaragüense, primera victoria de los pueblos de América Latina después de dos décadas de amargas derrotas, está lejos de haber concluido. Por el contrario, bajo nuevas condiciones, con un pueblo armado — en gran medida con las armas arrebatadas al mismo enemigo—, con un pueblo más consciente y más organizado, dirigido por una dirección revolucionaria probada — el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)—, contando con el poder político de un gobierno obrero y campesino, la revolución nicaragüense se apresta a llevar adelante nuevos combates que serán decisivos tanto para su propio futuro como para el del conjunto del proceso revolucionario centroamericano.

El ejército popular, la base del poder revolucionario

Los dos años transcurridos han sido años de profundos desarrollos internos, basados en las conquistas que permitieron el triunfo sobre Somoza.

El hecho decisivo para la victoria sandinista lo constituyó el aplastamiento y la desintegración de la vieja y odiada Guardia Nacional. La derrota aplastante del ejército de la tiranía a manos del pueblo armado y el ejército sandinista modificó globalmente la correlación política de fuerzas. La desintegración de la Guardia Nacional no sólo eliminó del poder a la fracción burguesa somocista, sino que, además, colocó a la fracción burguesa antisomocista y al imperialismo en condiciones de extraordinaria debilidad. Tiene toda la razón Tomás Borge —comandante del FSLN y Secretario del Interior—

(Pasa a la página 4)

Ver página 2

FIPSA: apoyo total a una lucha ejemplar

- Los trabajadores fueron desalojados de la planta que mantenían ocupada
- Después de 44 días, la huelga continúa

FIPSA: una valiosa experiencia para todos los trabajadores

Importantes acciones de solidaridad en la zona

Por Braulio Chávez

Los 800 trabajadores de la Fábrica de Implementos Petroleros SA (FIPSA) ubicada en Tulpetlac, Estado de México, se encuentran en paro desde el pasado 26 de mayo. Ese mismo día, los trabajadores también ocuparon las instalaciones de la empresa. El pasado 10 de julio, después de cuarenta y cuatro días de haberse iniciado el movimiento, los trabajadores que se encontraban dentro de la planta fueron desalojados. Sin embargo, la lucha continúa y aún está por definirse lo que puede ser o un rotundo triunfo de los trabajadores, o un duro golpe al movimiento obrero.

El movimiento se inició propiamente el 24 de mayo, cuando los trabajadores, cansados de las imposiciones del Comité Ejecutivo, decidieron convocar a una asamblea general, pues hacía siete meses que no se efectuaba asamblea alguna. La asamblea tenía precisamente como objetivos elegir una dirección sindical democrática, exigir la separación del asesor legal amafiado con la empresa y decidir a qué central obrera se adscribiría el sindicato.

La respuesta de la patronal, en contubernio con los burócratas sindicales, no se hizo esperar: cinco compañeros fueron despedidos —cuatro de ellos, miembros del Comité Ejecutivo electo democráticamente.

Pero los trabajadores tampoco tardaron en responder. La radicalidad y las formas de lucha que adquirió el movimiento en tan sólo dos días se han convertido, en la práctica, en toda una trascendental experiencia que debe ser conocida por el conjunto de la clase obrera. En efecto, una vez conocida la arbitraria medida tomada por la patronal, los trabajadores del primer turno decidieron presentarse masivamente ante las oficinas de la administración para exigir la reinstalación de los despedidos. La empresa amenazó entonces con rescindir el contrato... ¡a todos los trabajadores! si éstos no regresaban a laborar. La respuesta de los trabajadores fue la de ya no salir de la fábrica; allí habrían de permanecer hasta el viernes 10 de julio.

Más de un mes de movilizaciones

La noticia del paro y la toma de la planta de FIPSA por parte de los trabajadores corrió como reguero de pólvora por toda la zona obrera de Tulpetlac. Al conocer la situación, los obreros de otras empresas comenzaron a realizar movilizaciones y actos de apoyo para evitar que el movimiento fuera quebrado. La presencia de trabajadores de Kelvinator, Trailmobile, Isabel, Liberty, etc., en las puertas de la empresa se volvió un hecho cotidiano. Casi a diario, llegaban a ella contingentes de obreros y colonos para brindar toda clase de ayuda material y moral a los trabajadores que mantenían posesión de las instalaciones. Este acontecimiento en la zona de Tulpetlac ilustra perfectamente el cambio cualitativo que se viene operando en la conciencia de la clase trabajadora. En Tulpetlac, se ha logrado remontar el periodo en el que los distintos sectores que estuvieron en lucha tuvieron que padecer las consecuencias del aislamiento político, sobre todo si estas luchas eran en contra de la política de austeridad implementada por el gobierno y su secuela de ataques a los derechos sindicales. En el caso de FIPSA la solidaridad ha sido piedra de toque para evitar una nueva derrota.

Las esposas de los trabajadores se suman a la lucha

Otro punto vital de la lucha ha sido, sin lugar a dudas, el apoyo brindado por las esposas de los trabajadores. Desde el mismo día en que fueron tomadas las instalaciones de la empresa, varias mujeres hicieron acto de presencia; no tuvo que transcurrir mucho tiempo para que, como una sola, decenas de mujeres se organizaran para participar en las tareas de difusión, para el boteo, para acudir a los periódicos y a otros sindicatos a solicitar solidaridad. Es especialmente relevante el hecho de que las compañeras no sólo han resistido la presión que representa no tener en un momento dado dinero para que coma la familia, sino el que no hayan dado un solo paso atrás cuando la empresa comenzó a enviarles cartas diciéndoles que sus esposos estaban dentro de la planta en contra de su voluntad, y que debían convencer a los que estaban afuera de la "buena disposición de la empresa para lograr un acuerdo". Fueron justamente las compañeras mujeres las que estuvieron a la cabeza de las marchas de apoyo realizadas, particularmente de la multitudinaria manifestación que el miércoles 8 de julio, en pleno aguacero, reunió a más de 5 mil personas.

"Ya estamos muy quemados": BARAPEM

Dos días después se efectuó el desalojo con la presencia de más de cuarenta patrullas del Batallón de Radio Patrullas del Estado de México (BARAPEM). Inmediatamente, esa pandilla de asaltantes vestidos de policías se dedicó a intimidar a los trabajadores y sus esposas. Si no se atrevieron a intervenir en forma violenta fue porque, sin duda alguna, las protestas de los trabajadores del Estado de México contra las brutalidades del BARAPEM comienzan a tener una repercusión importante. Uno de los propios criminales del BARAPEM señalaba: ". . . ya estamos muy quemados y quieren nuestra desaparición. . .". Pero también fue importante para frustar cualquier intento de agresión la presencia de un numeroso contingente de obreros de Kelvinator que estaba a la expectativa, dispuesto a defender a los desalojados.

Los elementos del BARAPEM se limitaron a custodiar a Castorena, Secretario de Trabajo del gobierno del Estado de México, quien al momento de sellar las instalaciones firmó, sin embargo, un acta donde se señala que el gobierno del Estado de México y la empresa se comprometen a no ejercer represalias en contra de los trabajadores, a aceptar la constitución del sindicato de empresa y a reinstalar a varios de los despedidos.

La UOI, el gran ausente

Cuando los trabajadores se fueron a la lucha buscaron la asesoría de Juan Ortega Arenas, dirigente de la Unidad Obrera Independiente (UOI), quien la prometió para que pudieran lograr sus objetivos. Sin embargo, en la medida en que la situación se fue radicalizando el mentado asesor no sólo no hizo nada por ayudar a resolver el problema, sino que simplemente se esfumó de la acción. Así, el apoyo que los trabajadores esperaban podría brindarles la UOI se redujo a nada. Esta parte de la enorme lección que representa la huelga de FIPSA debe ser muy bien entendida. Mientras que la base trabajadora de los distintos sindicatos que forman parte de la UOI está dispuesta a colaborar con las luchas de otros trabajadores, como la de FIPSA, su dirección se dedica a realizar maniobras para encajonar a los movimientos que asesora en el marasmo de los aspectos legales, evitando a toda costa que los sindicatos miembros de la UOI realicen acciones directas de solidaridad con aquéllos.

No es casual que cuando Ortega Arenas se presentó al pleno de representantes seccionales y de delegados nacionales del sindicato de Diesel Nacional (DINA) —el sindicato forma parte de la UOI— haya expresado que ". . . allá los trabajadores de DINA si quieren llegar a la misma situación de los trabajadores de FIPSA, donde los trabajadores se apresuraron, tomaron la fábrica y actualmente no tienen salida. . .". Esta actitud, por demás elocuente, no es aislada de otros casos en los que el mentado asesor ha participado con nefastos resultados. Por el contrario, forma parte de un método de "lucha" que ha causado ya derrotas en varios lugares —baste recordar el caso de los 200 despedidos de NISSAN, su papel en Vitroplano y en DINA-DIKONA, o también el caso de Volkswagen, en donde la dirección simplemente se ha negado a aportar la cuota de solidaridad que los obreros aprobaron en favor de la revolución salvadoreña.

Los trabajadores que militan en la UOI deben exigir cuentas a su dirigente y obligarlo a que realmente se comprometa a dar todo el apoyo posible a la lucha de los trabajadores de FIPSA.

La lucha continúa

Los trabajadores de FIPSA han conseguido que la empresa y el gobierno estatal reconozcan en la práctica la existencia de la huelga. Pero no hay que olvidar que aún penden sobre la lucha muchos peligros. Los trabajadores que, ahora afuera de la fábrica, mantienen la huelga deben estar conscientes de ello. Los peligros van desde las maniobras de tipo legal que tratarán de instrumentar la empresa, el Comité Ejecutivo depuesto y el gobierno del estado (recordemos el papel que jugó el señor Castorena cuando la huelga de Kelvinator en 1975) hasta el uso abierto de la violencia. Este último peligro ya ronda por la fábrica. Por las noches, un grupo de golpeadores armados se ha dedicado a romper mantas y a borrar las pintas. A ello se suma el hecho de que la empresa y los burócratas de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) tienen organizado a un cuerpo de aproximadamente 160 esquiroles —algunos de los cuales apoyaron en un principio la huelga— que están dispuestos a romperla y que incluso, según se sabe, siguen cobrando su sueldo semanalmente.

Ante estos peligros, la decisión adoptada por los paristas en el sentido de mantener la movilización, buscando la más amplia solidaridad posible, es la mejor manera de protegerse. Lo que está en juego no es sólo la reinstalación de los despedidos, sino además el derecho de los trabajadores a elegir su propia dirección sindical, ejerciendo para ello la más completa democracia, y, en consecuencia, la posibilidad de optar por la central obrera a la que la base quiera adherirse, pues no se trata de aislar al sindicato. Así lo expresan las demandas de los trabajadores: reinstalación de los despedidos, reconocimiento del Comité Ejecutivo electo democráticamente, reconocimiento del sindicato como sindicato de empresa y militancia al interior de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Por todo ello la lucha de FIPSA es tan importante; por ello constituye ya toda una lección para los trabajadores de nuestro país; por ello, también, es tarea del conjunto del movimiento obrero, de sus partidos y de las organizaciones democráticas en general redoblar el apoyo a la ejemplarmente combativa lucha de FIPSA. ■

directorio

Bandera Socialista

Organo del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT, Sección Mexicana de la Cuarta Internacional). Por acuerdo de la Comisión Federal Electoral, el PRT obtuvo su registro como Partido Político Nacional el 11 de junio de 1981.

Director: Héctor de la Cueva.
Consejo de Redacción: Manuel Aguilar Mora, Arturo Anguiano, Alfredo López, Margarito Montes Parra, Ricardo Pascoe, Sergio Rodríguez, Edgard Sánchez.
Equipo Técnico: Valentín González, Enrique Hernández, Agustín del Moral, Francisco Ramírez, Martha Rodríguez, Victoria Romo.
Fotografía: Ma. Esther Alvarado, Eduardo Lugo.
Administración: Ruth Betancourt.
Domicilio de la Redacción y de la Administración: Baja California 71, Colonia Roma, México 7, DF. Teléfono: 584 9208. Impreso en Litho Balumcanán, teléfono 763 1275.

Los artículos firmados no expresan necesariamente el punto de vista de esta publicación. Bandera Socialista aparecerá todos los lunes de 1981 excepto el 5 de enero, el 13 de abril, el 14 de diciembre, el 21 de diciembre, el 28 de diciembre, y los lunes que coincidan con la realización de la escuela de cuadros y el congreso del partido programados para este año y cuyas fechas exactas daremos a conocer posteriormente. Toda correspondencia debe ser enviada a nombre del Director al Apartado Postal 11-423, México 11, DF.

Suscripciones en la República Mexicana. Por correo ordinario de tercera clase (sobre abierto): seis meses $120.00 MN; por correo ordinario de primera clase: seis meses $180.00; por correo aéreo: seis meses $150.00.
Suscripciones al exterior de la República Mexicana. Por seis meses, correo aéreo de tercera clase: Norteamérica, posesiones de EUA, Centroamérica y Las Antillas: $10.00 US Dlls.; Sudamérica: $8.50 US; Europa: $15.00 US.

Las suscripciones por un año cuestan el doble de las de seis meses.

Cierre de esta edición: 14 de julio.

Obreros de GM denuncian manipulación priísta

En días pasados, varios trabajadores de la planta que tiene en Toluca la empresa automotriz General Motors denunciaron públicamente la manipulación de que fueron objeto por parte de su dirección sindical para favorecer los intereses electoreros del Partido Revolucionario Institucional (PRI): durante la campaña electoral de Alfredo Del Mazo —candidato priísta a la gubernatura del Estado de México—, el Secretario General del sindicato de los trabajadores de dicha planta, Agustín García Lovera, virtualmente obligó a los trabajadores de la empresa a apoyar públicamente al partido del gobierno.

En su denuncia, este grupo de trabajadores señaló que ya no es posible seguir aceptando pasivamente las agresiones tanto de la empresa como de sus supuestos representantes, agresiones que ya no sólo se limitan a la restricción y la violación de sus derechos laborales —sobrecargas de trabajo, imposición de tiempos extras, etc.—, sino que ahora los trabajadores son puestos al servicio de las maniobras políticas de un partido patronal: el PRI.

Asimismo, los compañeros manifestaron que "la mafia sindical de García Lovera y compañía ha impuesto su control y dominio sobre los trabajadores a través de todo tipo de fraudes e intimidaciones". Abundando al respecto, los trabajadores indicaron que las asambleas son controladas y manipuladas por los miembros de la dirección sindical, quienes son apoyados incondicionalmente por algunos trabajadores inconscientes. De esta forma —dijeron los compañeros—, hasta ahora el trabajador de base no puede expresar su inconformidad sino bajo el riesgo de ser despedido, como de hecho ya ha sucedido en varias ocasiones. ■

La unidad y la democracia están en peligro en el STUNAM

La dirección amenaza con purgar a la oposición

Por Lucinda Nava Alegría

Dentro de la pasada coyuntura electoral para renovar al Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), algunos miembros del sindicato —encabezados por el entonces Secretario de Trabajo, Leonardo Olivos Cuéllar— consignaron ante la Comisión Autónoma de Vigilancia (CAV) al Secretario General del STUNAM, Evaristo Pérez Arreola, acusándolo de haber incurrido en fraude y extralimitación de funciones. Para sustentar su acusación entregaron a la CAV una serie de pruebas documentales. Este hecho fue ampliamente conocido tanto dentro del sindicato como, inclusive, fuera del mismo, debido a la publicidad que los propios acusadores decidieron darle al asunto.

Leonardo Olivos Cuéllar y los demás miembros del sindicato que hoy se agrupan en la corriente sindical denominada Resurgimiento habían militado siempre en la Corriente Roja —la misma a la que pertenece Pérez Arreola y que es mayoritaria en la dirección—, y compartido sus definiciones y su práctica políticas. Las discrepancias internas comenzaron cuando se discutió en la Corriente Roja y en Unidad Democrática (que agrupa a la Corriente Roja y al Consejo Sindical) quién encabezaría la planilla a presentar en la elección del nuevo Comité Ejecutivo. Esto fue lo que provocó la escisión en la Corriente Roja y los posteriores enfrentamientos entre Unidad Democrática y Resurgimiento, enfrentamientos que han llegado incluso a las agresiones físicas. El problema es que el clima divisionista y de enfrentamiento originado por las crisis de la Corriente Roja y Unidad Democrática amenaza con extenderse al conjunto del sindicato.

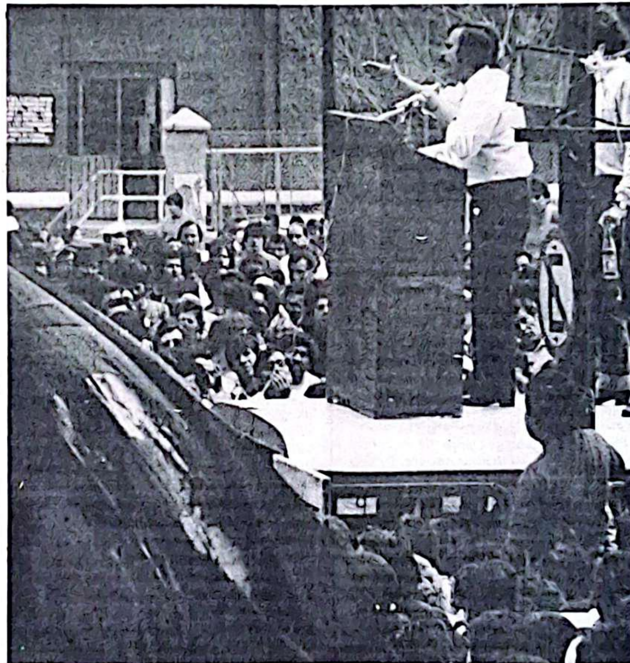
El dictamen de la CAV —que incorrectamente han hecho ya público la corriente Resurgimiento y la propia Unidad Democrática— declara culpable a Pérez Arreola por extralimitación de funciones y uso indebido de los recursos del sindicato. A la luz de lo establecido por los estatutos del STUNAM, las sanciones que corresponden son la de destitución del cargo y la de expulsión del sindicato. Sin embargo, este punto de vista no es definitivo; el STUNAM, como todo sindicato democrático, ofrece una serie de recursos institucionales para evitar que se cometa cualquier tipo de arbitrariedad. Así, el dictamen de la CAV debe ser revisado minuciosamente por la Comisión de Honor y Justicia; además, el acusado tiene la posibilidad de apelar y defenderse ante todas las instancias del sindicato; y, finalmente, el Consejo General de Representantes (CGR) o, en última instancia, el congreso pueden resolver políticamente la situación a partir de la evaluación objetiva de todos los elementos del caso.

Defenderse es un derecho absolutamente legítimo. Evaristo Pérez Arreola es inocente mientras no culmine el proceso de investigación y se compruebe lo contrario. En ese sentido, Pérez Arreola ejerció su derecho de no entregar pruebas de descargo a la CAV; con ello mostró, sin embargo, que le tiene una desconfianza *a priori* a esta comisión. Pero lo que de plano ya no resulta ni mínimamente justificado, sino más bien a todas luces malintencionado, es que se acuse a la CAV de fraccional por el simple hecho de haber emitido un dictamen de culpabilidad cuando de manera, esa sí, fraccional se le niegan expresamente los elementos de juicio (las pruebas de descargo) que de ser válidos y reales tal vez hubieran permitido modificar el dictamen señalado. Para entender esto es necesario regresar un poco en el tiempo.

En efecto, en el pasado Tercer Congreso Ordinario del STUNAM, los puntos de vista de la oposición tuvieron una muy buena acogida, al grado de que en algunas votaciones llegó a obtener más del cuarenta por ciento de los votos. En especial, la oposición agrupada en el Bloque de Fuerzas Democráticas logró avances significativos y obtuvo un gran triunfo: ganar la mayoría en la CAV. Ante esto, Unidad Democrática reaccionó de la peor manera posible. Así, desde el primer momento buscó la manera de desprestigiar, descalificar y nulificar a la CAV, pretensión que se hizo evidente durante la pasada elección de Comité Ejecutivo, cuando consignó ante la Comisión de Honor y Justicia a dos miembros de la CAV por el hecho de que sus firmas aparecieron en un desplegado de apoyo a la planilla del Bloque de Fuerzas Democráticas. Esta consignación y el proceso de investigación que sigue abierto son, a todas luces, una arbitrariedad, ya que los miembros de la CAV consignados han declarado públicamente que nada tuvieron qué ver con el mencionado desplegado, que sus nombres fueron incluidos en él sin su conocimiento. Posteriormente, la ofensiva de Unidad Democrática contra la CAV aumentó cuando ésta inició la investigación en torno a las acusaciones presentadas por la corriente Resurgimiento en contra de Pérez Arreola. A partir de ese momento se hicieron más fuertes e insistentes los rumores amenazantes en el sentido de que si la CAV presentaba un dictamen de culpabilidad se iniciaría una lucha por desestabilizarla y se convocaría a un congreso extraordinario para destituirla.

De esta forma, dada su intención de defender a capa y espada la inocencia del Secretario General del STUNAM, Unidad Democrática ha iniciado una dinámica política de enfrentamiento y provocación. Así, el pasado 7 de julio, mientras Evaristo Pérez Arreola rendía su declaración ante la Comisión Autónoma de Honor y Justicia, Unidad Democrática montó un mitin en el local del STUNAM con 300 personas, entre las que destacaba el contingente de los pequeños comerciantes de Ciudad Universitaria, que no son miembros del sindicato Los asistentes portaban pancartas y mantas en las que se leía: "Apoyo total a Evaristo", "Respeto a las mayorías" y —escribiéndolo junto al símbolo del Bloque de Fuerzas Democráticas— "calumnias, demagogia, difamadores, oportunistas".

En medio de gritos de "¡fuera el bloque!", "¡abajo los traidores!" y "congreso, congreso", Rito Terán, Eliezer Morales, Erwin Stephan, Agustín Rodríguez y Evaristo Pérez Arreola —todos miembros del Comité Ejecutivo del STUNAM— arengaron a los presentes con sendos discursos en los que, en un tono por demás violento, le declararon la guerra al Bloque de Fuerzas Democráticas, desconocieron a la CAV, denunciaron una supuesta "santa alianza" entre el Bloque de Fuerzas Democráticas y "los traidores" de Olivos Cuéllar, y amenazaron con un Congreso Extraordinario para "ver de qué lado están los trabajadores" y "juzgarlos"(?).



La dirección sindical ha respondido a la consignación de Pérez Arreola con una campaña de ataques contra la oposición que amenaza con minar muy seriamente la democracia en el STUNAM y meter en una grave crisis al sindicato.

Esta política de Unidad Democrática es, además, de una irresponsabilidad mayúscula, si se toma en cuenta que sus "declaraciones de guerra" se dan en el momento en que el STUNAM está comprometido en la lucha en contra de las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. En efecto, el próximo 17 de julio el STUNAM emplazará a huelga y, de no llegarse a un acuerdo satisfactorio en las negociaciones con las autoridades, el lunes 3 de agosto estallará la huelga en toda la universidad. Los trabajadores esperan mucho de esta lucha; problemas como el de la retabulación están pendientes desde hace varios años. Es indudable que si en estos momentos se desvían la atención y los esfuerzos del sindicato a la lucha interna, la patronal universitaria sabrá aprovechar muy bien la división y la debilidad del mismo.

La posición del Bloque de Fuerzas Democráticas frente al acto del día 7 y en los posteriores debates que se han dado en varias asambleas es muy precisa. En un volante que empezó a circular el día 8, el Bloque de Fuerzas Democráticas plantea: primero, que fue totalmente incorrecta la manera como la corriente Resurgimiento y la Unidad Democrática sacaron a la luz pública el dictamen de la Comisión Autónoma de Vigilancia; segundo, que una vez que se ha hecho público el dictamen lo más sano es que —a partir de las pruebas existentes, una vez culminado el proceso de investigación por parte de la Comisión de Honor y Justicia, y, por supuesto, una vez concluida la lucha en contra de las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo— se discuta abiertamente y de manera seria; y, tercero, que en estos momentos es sumamente peligroso abrir una lucha fraccional al interior del sindicato, y que en este sentido, el Congreso Extraordinario, entendido como un tribunal para juzgar a la Comisión de Vigilancia y al Bloque de Fuerzas Democráticas, puede generar una dinámica sumamente peligrosa que dañe irreversiblemente al STUNAM.

En efecto, lo que hoy está en juego en el STUNAM va mucho más allá del establecimiento de la culpabilidad o la inocencia de un dirigente, por importante que este sea; lo que verdaderamente está en juego es el destino mismo del sindicato, su carácter.

Unidad Democrática no es homogénea. En ella hay fuerzas que no son muy partidarias de respetar los derechos de otras corrientes. Particularmente, el Consejo Sindical es una fuerza que ha aceptado siempre a regañadientes la proporcionalidad —es decir, la conformación proporcional de las diferentes instancias del sindicato de acuerdo a la fuerza de cada corriente—; para el Consejo Sindical, este principio básico de la democracia sindical está a prueba, y puede ser que su idea de lo que es un sindicato independiente y democrático tenga como modelo lo que es actualmente, por ejemplo, el Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), un sindicato que hacia el exterior se define y lucha por la independencia, la democracia y la unidad sindicales, pero cuya dirección al interior no sólo no permite cauces para la libre expresión y participación de las minorías sino que, al contrario, se muestra profundamente intolerante e incluso represiva con la oposición.

La responsabilidad mayor recae sobre los militantes del Partido Comunista Mexicano (PCM) en el STUNAM. Como fuerza mayoritaria, su conducta puede ser definitoria para el desenlace del conflicto; si desean que encuentre una salida positiva deben hacer todo lo posible por impedir que el conflicto continúe escalándose, deben reflexionar sobre las implicaciones políticas que tendría el Congreso Extraordinario que está proponiendo Unidad Democrática. ¿Qué explicación van a darle a los trabajadores del STUNAM y al movimiento obrero en general sobre la realización de un congreso que, a diferencia de todos los congresos realizados en la historia del sindicalismo en la UNAM, no analizaría la situación política, no discutiría nuevas perspectivas de acción, no resolvería sobre tareas que hagan avanzar la democracia, la unidad y el carácter de lucha del sindicato, sino que tendría como objetivo juzgar a la Comisión Autónoma de Vigilancia y al Bloque de Fuerzas Democráticas? El congreso, concebido en estos términos, inevitablemente desataría una feroz lucha fraccional. Por eso, de ninguna manera es exagerado decir hoy que, ante esa eventualidad, la unidad del STUNAM está en serio peligro. Si este congreso-tribunal llega a realizarse, el desprestigio del sindicato y la descomposición interna podrían ser inevitables. A unos cuantos meses de que, como producto del ejercicio del derecho de la proporcionalidad, por primera vez la oposición ganó mayoría en la Comisión Autónoma de Vigilancia y ocupa un lugar importante en el Comité Ejecutivo, desatar una lucha fraccional significaría, de una u otra manera, cuestionar al principio de la representación proporcional, minar muy seriamente la democracia al interior del sindicato. Y eso no se puede permitir; una cuestión tan grave nos obligaría a luchar a fondo por defender este principio. ■

¡Cuba sí, yanquis no!

(Viene de la portada)

propia revolución como un eslabón más de la cadena de las luchas revolucionarias en nuestro continente. De ahí precisamente que se haya mantenido, durante estos veintidós años, como una revolución tan viva, como un arma tan punzante contra el imperialismo.

Y hoy, precisamente, la relación estrecha de Cuba con los procesos revolucionarios que se desarrollan en Centroamérica y el Caribe irrita más que nunca al imperialismo. Por esta razón, se han puesto de nuevo a la orden del día las amenazas de los gobernantes estadunidenses contra este país.

El imperialismo yanqui está impulsando un vasto plan de nuevas y más profundas agresiones contra la revolución cubana. Está recrudeciendo, por ejemplo, el bloqueo que durante tantos años ha mantenido contra la isla.

También se sabe que da cada vez más apoyo a bandas de matones anticastristas. Recientemente, el gobierno cubano denunció el descubrimiento de cinco matones que tenían como objetivo asesinar a Fidel Castro. Difícilmente Ronald Reagan podrá eludir la responsabilidad de su gobierno en esta nueva intentona de asesinato.

Por otra parte, Washington está incrementando considerablemente sus efectivos militares tanto en Florida como en Guantánamo, el enclave ignominioso que mantiene el imperialismo en la propia isla. Dentro de este marco de amenazas militaristas se inscriben las constantes maniobras navales norteamericanas en el Caribe, que no son sino verdaderos ensayos de invasión contra Cuba.

Finalmente, los imperialistas están tratando, con éxito en varios casos, de reditar un bloque reaccionario contra Cuba con los gobernantes de los países latinoamericanos dispuestos a jugar abiertamente el papel de títeres de sus amos del Norte. El triste papel de estos gobiernos está determinado por el pánico que le tienen a las movilizaciones revolucionarias o al fermento social que se acumula en sus propios países, de lo que culpan en gran medida a los revolucionarios cubanos.

Pero la nueva ofensiva imperialista no sólo no ha amedrentado al pueblo cubano, sino que ha revivificado a la revolución cubana. Nada menos que, tan sólo el año pasado, tuvieron lugar las más gigantescas movilizaciones en la historia de Cuba. Millones de cubanos se movilizaron en varias ocasiones para responder a las campañas de difamación y a los simulacros de invasión llevados a cabo por los imperialistas yanquis. Como en el pasado, el pueblo cubano está empuñando nuevamente las armas para enfrentar las amenazas imperialistas, organizándose en las Milicias de Tropas Territoriales.

El 19 de abril, en el vigésimo aniversario de la fracasada agresión imperialista en Playa Girón, el presidente cubano Fidel Castro supo resumir esta situación: 'Las amenzas de los imperialistas no nos hacen temblar ...todo lo contrario; convertimos las amenazas imperialistas en una fuerza; y a los imperialistas que tanto usaban esa consigna de 'Remember Pearl Harbor', 'remember' otras cosas, pudiéramos decirles 'remember Girón, remember Girón' (...) Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba...y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos ...y que esa revolución socialista la defendamos con esos fusiles, y que esa revolución socialista la defendamos con el valor con que ayer nuestros artilleros antiaéreos acribilláron a balazos a los aviones agresores. Y esa revolución no la defendemos con mercenarios, la defendemos con los hombres y las mujeres del Pueblo".

Igualmente, la arrogante actitud provocadora del gobierno estadunidense no ha hecho otra cosa que reforzar la solidaridad entre los procesos revolucionarios de Nicaragua, El Salvador, Granada y Cuba.

Sin embargo, esto no es suficiente para desactivar el peligro de las agresiones imperialistas. El imperialismo norteamericano intentará redoblar sus ataques y planes belicistas contra Cuba, y contra las revoluciones en marcha en Centroamérica y el Caribe. Un golpe a cualquiera de esas revoluciones sería un duro golpe para todo el proceso revolucionario. Defender a Cuba es defender a las revoluciones en El Salvador, Nicaragua y Granada; defendiendo a esas revoluciones se defiende también a Cuba.

Para amarrarle las manos al imperialismo norteamericano es necesario sumar la solidaridad de todos los pueblos de nuestro continente, incluido el norteamericano, a la solidaridad mutua que existe entre esas revoluciones. El mejor homenaje que podemos rendirle a la revolución cubana en su vigésimosegundo aniversario es el de redoblar la lucha por que cese el bloqueo diplomático y económico contra Cuba; por que se detenga la escalada militarista del imperialismo en el Caribe; por que salgan las tropas yanquis de Guantánamo; por que dejen de organizarse ataques mercenarios contra Cuba.

México se ha ganado el aprecio del pueblo cubano por su negativa a participar en el bloqueo contra la isla y por la ayuda que le ha brindado. Sin embargo, esto no es suficiente. Al mismo tiempo que dice defender a Cuba, el gobierno mexicano ha permitido sin la más mínima protesta que Washington vete la participación de Cuba, presidente de los países no alineados, en la Junta Norte-Sur. Igualmente, el famoso plan común por parte de México, Estados Unidos, Canadá y Venezuela para ayudar a la región de Centroamérica y el Caribe, y las condiciones que ha puesto México para llevarlo a cabo han resultado ser un fiasco que sólo sirve para encubrir lo que verdaderamente está haciendo, y no está dispuesto a dejar de hacer, el imperialismo norteamericano: agredir a las revoluciones que se desarrollan en la región y a su inspiradora —la revolución cubana. Debemos exigir que el gobierno mexicano no participe en ningún plan que signifique encubrir las agresiones del imperialismo contra Cuba ni permita su exclusión de foros internacionales.

Exijamos también al gobierno mexicano que incremente la ayuda desinteresada al hermano pueblo cubano. En lo inmediato, una buena forma podría ser que se proporcione petróleo barato y en cantidad suficiente, sí, pero a países como Cuba que lo necesitan para impulsar un desarrollo que está orientado realmente a satisfacer las necesidades de la población y que es un ejemplo para los pueblos de todo el continente. ■

Nicaragua... un cambio radical

(Viene de la portada)

cuando dice que en América Latina hablar del poder político significa hablar de la situación de las fuerzas armadas y, concretamente, que no puede hablarse de una verdadera revolución si no se destruye el aparato militar del estado capitalista y se le sustituye por uno revolucionario. Así, si bien en América Latina han habido revoluciones muy profundas que han destruido a los viejos ejércitos oligárquicos, lo determinante ha sido que sobre sus cenizas se han restructurado los nuevos ejércitos burgueses que, tarde o temprano, han terminado por reconstituir el poder político de las viejas clases dominantes. Esa es, ante todo, la historia de México y Bolivia. Otra es la historia de las revoluciones cubana y nicaragüense. En Cuba, donde el poder oligárquico fue destruido para abrir paso a la constitución del primer estado obrero de América Latina, fincado en la organización política y militar de las masas. Igualmente, en Nicaragua, aunque aún no se ha instaurado un estado obrero, el ejército popular sandinista ha sido el ejército revolucionario que, junto a las milicias, ha constituido el respaldo fundamental del proceso revolucionario y su resultante, el gobierno obrero y campesino.

Grandes avances en la organización y la conciencia de las masas

En la Nicaragua prerrevolucionaria no existía una fuerte organización de masas. La clase obrera urbana y rural, el campesinado y los sectores pobres de la población estaban precariamente organizados, si bien esto se veía compensado por una larga tradición de lucha y de formas de resistencia que les habían dotado de una alta calidad política. Sin embargo, inmediatamente después del triunfo contra la dictadura se inició un vertiginoso desarrollo de la organización de las masas trabajadoras de Nicaragua.

No obstante que —como toda experiencia nueva— este desarrollo no ha estado exento de errores, la constitución de sindicatos en la ciudad y el campo, el desarrollo de ciertas formas embrionarias de control obrero y campesino sobre la producción, la participación prácticamente generalizada de las masas en cada nuevo paso decisivo, han significado un profundo proceso de maduración y elevación de la conciencia política de los trabajadores nicaragüenses. En ese proceso ha cumplido un papel fundamental la política educativa, conscientizadora, encabezada por la dirección sandinista. En este terreno destaca la campaña de alfabetización iniciada desde el primer año de la victoria, la que ha permitido eliminar en buena medida las trabas que representan el analfabetismo y el atraso cultural.

Las dificultades económicas

A nivel económico, la revolución sandinista ha enfrentado enormes problemas. La dictadura somocista heredó un país en ruinas. La estructura de las empresas agrícolas era, salvo en sectores muy localizados, de un carácter profundamente rentista y especulativo. Del mismo modo, la estructura industrial era muy débil y se encontraba en ruinas. Así, el país, totalmente agotado por el enorme esfuerzo que significó la revolución y por el saqueo somocista, quedó enteramente endeudado. De igual forma, a pesar de las nacionalizaciones de los bienes de Somoza y sus allegados, la mayor parte de la economía del país sigue en manos privadas. Así pues, el plan de reactivación económica puesto en marcha por los sandinistas tuvo que enfrentar, inevitablemente, esos dos obstáculos: una economía en ruinas y una burguesía poseedora de la mayoría de los bienes de producción.

Puede afirmarse a ciencia cierta que, sobre todo en el sector estatal, la dirección sandinista ha logrado grandes avances en su objetivo de reactivar la economía. Sin embargo, vista globalmente, la reactivación económica ha fracasado a consecuencia de la resistencia de la burguesía a participar en ésta. La burguesía, lejos de impulsar la economía, ha continuado descapitalizando las empresas; lejos de modernizar la producción agrícola ha dejado que cientos de fincas agrícolas se arruinen. Es decir, la burguesía no quiere invertir ni desarrollar la economía si no se le restituye el poder político y se le garantizan sus ganancias extraordinarias.

La disyuntiva en Nicaragua

Es por ello que, en ocasión del segundo aniversario de la revolución, esta situación enfrenta a la dirección sandinista a una grave disyuntiva política: o continúa preservando a la burguesía, ausentista y descapitalizadora, a costa de la ruina económica del país, o la expropia y precipita así el enfrentamiento decisivo entre la burguesía y el gobierno obrero y campesino que ella dirige.

Definitivamente, esta disyuntiva no es fácil, pero su resolución es inevitable. Si la revolución sandinista quiere seguir viva y avanzando debe pasar sobre el cadáver de la burguesía. En contraposición, la burguesía, para sostenerse y reproducirse como clase, debe enfrentar a la revolución y derrotarla. Es evidente, pues, que revolución y burguesía no pueden vivir juntas demasiado tiempo.

Además, el desarrollo mismo de las revoluciones salvadoreña y guatemalteca — que mantienen viva la llama insurreccional en toda el área— ha dado un nuevo impulso a la revolución nicaragüense. Y, a su vez, lo que suceda en Nicaragua será decisivo para aquellas revoluciones. La transformación de Nicaragua en estado obrero aceleraría todo el proceso revolucionario centroamericano.

Por su parte, el imperialismo norteamericano —que no ha dejado un sólo día de hostigar a la revolución nicaragüense— prepara a las bandas somocistas en Honduras y en su propio territorio para nuevas agresiones armadas, e inclusive no ha abandonado del todo la posibilidad de un ataque frontal a Nicaragua en caso de que los sandinistas expropien completamente a la burguesía. Las incursiones de bandas paramilitares asesinas al territorio nicaragüense, las provocaciones del ejército dictatorial de Honduras —el cual ha amenazado incluso con una guerra fronteriza—, las campañas internacionales del imperialismo contra la revolución —tales como la acusación en contra de ésta, dentro del tristemente célebre "Libro Blanco" de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de participar directamente en el proceso revolucionario salvadoreño—, las amenazas continuas de invasiones y desembarcos desde Estados Unidos o desde otros países, el mismo bloqueo económico y alimenticio, todo ello presagia nuevas y más fuertes agresiones del imperialismo norteamericano y las burguesías centroamericanas contra el pueblo nicaragüense.

No obstante, los nuevos debates surgidos entre la dirección sandinista y la burguesía acerca del destino y la orientación de la economía —que vienen a sumarse a los enfrentamientos sostenidos en el pasado en torno a la profesionalización del ejército y la policía, y su "despolitización" exigidas por la burguesía; en torno a la exigencia burguesa de que se convoque a elecciones y en torno a la composición del Consejo de Estado—, y las movilizaciones populares contra el boicot auguran que, así como cada uno de los enfrentamientos pasados resultó en un fortalecimiento político del gobierno obrero y campesino, ahora se avanzará, en el terreno de la economía, en la cimentación de las bases materiales del nuevo estado que reclama con urgencia la revolución nicaragüense: el estado obrero.

La dirección sandinista ha anunciado que este segundo aniversario implicará un jalón decisivo. El camino está abierto y al frente marcha una dirección revolucionaria.

Encuentro en Nassau: un velo para la intervención imperialista

Las "condiciones" de JLP estaban condenadas al fracaso

Por Enrique Hernández

Precedida por una gran campaña publicitaria, el pasado 11 de julio tuvo lugar en Nassau, Bahamas, la "trascendental" reunión entre el Secretario de Estado del gobierno de Reagan, general Alexander Haig, y los cancilleres de Canadá, México y Venezuela. El pretendido objetivo de la reunión era el de acordar un supuesto plan de ayuda común por parte de estos gobiernos a los países del área centroamericana y el Caribe.

Lo que más fue destacado por la prensa nacional en los días previos a la reunión fueron las famosas condiciones que el gobierno mexicano expuso desde la visita de López Portillo a Reagan para llevar adelante el que algunos llamaron "Miniplán Marshall": que no incluyera ayuda militar, que no se excluyera a país alguno y que no se utilizara con fines anticomunistas.

Sin embargo, a pesar de que se esforzaron por lograrlo, ni el gobierno mexicano ni la prensa nacional pudieron presentar una imagen optimista sobre los resultados del encuentro. Porque la verdad es que la tan cacareada reunión no resultó ser sino un anodino acto en el que, como era de esperarse, no se llegó a acuerdo concreto alguno y que en cambio sí sirvió para desviar la atención de la, ésa sí muy real, intervención imperialista en la región. De esta forma, el gobierno mexicano —supuesto representante de la autodeterminación de los pueblos de Centroamérica y el Caribe en la reunión— no fue sino a hacerle el juego a los planes del imperialismo, a encubrir las cotidianas agresiones militaristas de Washington al crear ilusiones de que es factible que el imperialismo abandone sus acciones bélicas y se comprometa a impulsar un desinteresado y pacífico plan de ayuda económica a la región.

En efecto, el propio canciller mexicano Jorge Castañeda se vio obligado a reconocer, en el lenguaje diplomático, que la reunión había sido un fracaso. No obstante, como para "taparle el ojo al macho", Castañeda declaró que el comunicado conjunto emitido al final de la reunión, si bien no es "todo lo explícito y claro que México hubiera deseado, es en realidad mucho menos intervencionista, mucho menos militar que la proposición original que Estados Unidos había presentado al inicio".

Ciertamente, en el documento no se menciona de manera explícita el asunto de la ayuda militar, pero eso no tiene nada qué ver con que el imperialismo haya modificado su política hacia la región. Una cosa son la palabrería y los acuerdos insustanciales salidos de esa reunión, y otra muy diferente lo que está haciendo realmente el imperialismo. Por el contrario, Washington cuenta ahora no sólo con el aval descarado de Venezuela —cuyo gobierno proimperialista ha declarado que está a favor del envío de armas a las dictaduras centroamericanas—, sino con la silenciosa complicidad del gobierno mexicano.

El que no se hable de ayuda militar en el mencionado documento no cambia el hecho de que para este año el Congreso norteamericano ha aprobado el envío de ayuda militar por treinta y cinco millones de dólares a la junta salvadoreña. Esa cantidad se eleva muchísimo si se consideran los gastos por concepto de asesoramiento militar. Asimismo, para el año fiscal 1982 el gobierno de Reagan se ha propuesto enviar a la criminal junta salvadoreña veinticinco millones de dólares más de cándida "ayuda". A esto hay que sumarle la cuantiosa ayuda económica que Venezuela ha otorgado a la junta militar democristiana de El Salvador.

Quienes creyeron que el imperialismo estaba tomando en serio el encuentro y que éste modificaría la conducta de Washington se han llevado un gran fiasco. El imperialismo no tiene la menor intención de hacer a un lado su política belicista: a despecho de la reunión de Nassau, el imperialismo se propone reforzar el bloqueo contra Cuba, apretar el cerco y los chantajes contra Nicaragua, intensificar su ofensiva contra las revoluciones en curso, y apuntalar a las dictaduras centroamericanas y a los gobiernos proimperialistas del Caribe —como los de Jamaica y Barbados— por todos los medios posibles. Las agresiones contra los países revolucionarios de Centroamérica y el Caribe incluyen la preparación de ejércitos mercenarios en los que participan desde "gusanos" cubanos y ex guardias somocistas hasta miembros del Ku Klux Klan y veteranos yanquis de la guerra de Vietnam. Estos mercenarios, cuyas actividades han sido declaradas "asuntos privados" —y por lo tanto no objeto de su vigilancia— por el Departamento de Estado norteamericano, tienen una de sus bases en los pantanos de Dade County —cerca de Miami, Florida— e incluso dan, desde su base "secreta", conferencias de prensa a noticieros de televisión como el matutino Good Morning America, que se transmite a todo Estados Unidos.

Por otra parte, el mismo comunicado conjunto, en el que —según los gacetilleros de la prensa nacional— se "plasmaron los principios mexicanos", dice textualmente que "los países donantes (de la ayuda a la región) **tienen la libertad de escoger los países con los cuales cooperarán y las mejores formas de hacerlo**" (subrayados de BS). Es decir, que la ayuda económica común que supuestamente era el objetivo de la reunión ha sido una "tomada de pelo" y que la famosa condición del gobierno mexicano de que no se excluyera a ningún país sólo ha conseguido quedar en el ridículo.

Cada "donante" ha quedado en la libertad de ayudar a quien mejor le parezca. Y, por supuesto, al imperialismo no le ha cruzado ni por un momento la idea de ayudar indiscriminadamente tanto a los países revolucionarios como a sus "gobiernos amigos". Así, la reunión de Nassau no modifica en lo más mínimo el hecho de que, mientras corta la ayuda, chantajea e intenta desestabilizar a países como Nicaragua y Granada, el imperialismo inyecta importantes sumas a los países gobernados por sus títeres.

Aún más, el "plan de apoyo económico" en el que el imperialismo está dispuesto a participar sólo puede redundar en el reforzamiento de su dominación. Washington sólo dará dinero a quienes éste les sea indispensable para derrotar una revolución en marcha o a quienes le garanticen condiciones de rentabilidad —estricto control sobre los trabajadores, todo tipo de facilidades en materia de impuestos e incondicionalidad política. El "desarrollo", como lo entiende el imperialismo norteamericano, sólo puede ser el de sus propias ganancias; el desarrollo así entendido sólo puede propiciar una mayor deformación de la economía de aquellos países que reciban tal "ayuda". La situación en el Caribe puede ilustrar esto.

En el Caribe habitan 30 millones de personas y existen, por lo menos, otros 3 millones que han emigrado a Estados Unidos e Inglaterra. Se calcula que, de seguir así las cosas, para el año 2000 el Caribe tendrá 40 millones de habitantes y diez en la emigración. El desempleo en los países capitalistas de esa región rebasa el quince por ciento y continúa aumentando —ello incluye a los propios emigrantes que se encuentran desempleados en ciudades como Nueva York, EU, Liverpool y Brixton, Inglaterra.

En Puerto Rico —sujeto a una explotación colonial—, el "desarrollo" ha significado una tasa de desempleo del cincuenta por ciento. El imperialismo ha tratado de paliar la crisis que él mismo provocó con el fin de mantener el mito de una democracia capitalista en el Caribe. Para ello ha recurrido a la implementación de una serie de subsidios. Así, hasta hace unos ocho meses, el cincuenta y ocho por ciento de la población de Puerto Rico recibía cupones del gobierno norteamericano para obtener alimentos. Pero ahora incluso este tipo de "ayuda" está siendo recortada por el gobierno de Reagan.

Igualmente, en Jamaica hubo de imponerse un gobierno proimperialista antes de que Washington estuviera dispuesto a dar alguna ayuda. Desde el pasado 25 de febrero, el gobierno norteamericano anunció la creación de un comité especial —presidido nada menos que por el magnate financiero David Rockefeller— para estimular las inversiones en Jamaica. En la misma fecha, se anunció que el gobierno de Reagan estaba dando su aval al proimperialista Edward Seaga (CIAga, como popularmente lo apodan en Jamaica) para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le concediera un crédito por 600 millones de dólares a tres años. Hay que recordar que precisamente, en contraste con lo anterior, una de las medidas que tomó el imperialismo para asfixiar al gobierno tímidamente antimperialista de Manley —que precedió al de Seaga— fue la de cortarle la ayuda de este organismo.

En la República Dominicana, la compañía Gulf and Western posee un enclave azucarero que abarca del cinco al diez por ciento de la tierra cultivable de ese país y al que ahora ha convertido en una zona industrial "franca" —es decir, libre de impuestos. La economía dominicana se encuentra fuertemente deformada por la penetración de las transnacionales. En Jamaica, Barbados y otras islas los negocios de los capitalistas norteamericanos —como los de los japoneses y europeos— son muy similares.

Estos ejemplos bastan para mostrar el tipo de ayuda que está dispuesto a dar el imperialismo norteamericano y lo que significa. Cualquier programa de ayuda del imperialismo norteamericano tiene como condición el sometimiento de los pueblos de la región.



Haig, durante su intervención en la comedia de Nassau.

Y, pese a todos sus desplantes demagógicos, lo que está haciendo el gobierno mexicano con reuniones como la de Nassau es encubrir los verdaderos planes y acciones del imperialismo. Aún más, el propio gobierno mexicano está aportando su nada despreciable "granito de arena" a la campaña contrarrevolucionaria al ayudar a gobiernos proimperialistas y dictatoriales como los de El Salvador y Guatemala, por ejemplo, con el suministro de petróleo.

Porque la política, aparentemente democrática y progresista, del gobierno mexicano de dar una ayuda indiscriminada a todos los países del área es en realidad una trampa que debe ser condenada. Desde su punto de vista, el imperialismo tiene razón al sólo brindarles ayuda a sus "gobiernos amigos". Y desde el punto de vista de cualquier pueblo del mundo nada justifica que se dé ayuda por igual a las dictaduras que oprimen a sus pueblos y a los países que se han liberado.

Los trabajadores mexicanos debemos exigir que el gobierno suspenda toda ayuda a las dictaduras de Centroamérica y a los gobiernos proimperialistas del Caribe, y que la amplíe para aquellos países que, como Cuba y Nicaragua, se han liberado del imperialismo y cuyo modelo de desarrollo está basado realmente en las necesidades de la población.

A la "pacificación" de Centroamérica y el Caribe que pretende el imperialismo norteamericano y a los planes que le hacen el juego, como el de Nassau, el pueblo mexicano debe oponer su solidaridad activa con los pueblos que combaten por su liberación y con aquellos que luchan por defenderla, pues deshacerse del yugo imperialista y edificar una nueva sociedad es la única solución verdadera para los países de Centroamérica y el Caribe. Haciéndolo así, el pueblo mexicano estaría de hecho invirtiendo en su propio futuro. ■

Escalada represiva en el DIF

Por Mariana Jiménez

Ya en números anteriores de Bandera Socialista hemos informado de la represión que el gobierno ha desatado en contra de los trabajadores del sector salud. Así, denunciamos el despido arbitrario de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) del doctor Francisco Mercado, dirigente de la Unión Nacional de Médicos (UNM) y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Igualmente, informamos del encarcelamiento injustificado de los ex dirigentes de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia (SNTSA) Antonio Vital y María de los Angeles Melo. Significativamente, el inicio de esta ola represiva se dio paralelamente al surgimiento del Comité Promotor del Frente Democrático de Trabajadores de la Salud.

La ola represiva ha afectado también a los trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde se ha comenzado a aplicar una política de recorte presupuestal y de reajuste de personal que ha implicado el despido de algunos trabajadores que se han distinguido por su participación política y por haber dirigido luchas reivindicativas, así como el imponer a otros cargas excesivas de trabajo.

De esta forma, ha sido cesada la compañera Lilia Irrizari, militante de la Liga Obrera Marxista (LOM) que laboraba en el Banco de Sangre del Instituto Nacional de Pediatría. Obviamente, el despido se dio de manera ilegal y violando las Condiciones Generales de Trabajo; para realizarlo, las autoridades utilizaron incluso métodos policiacos, pues impidieron de manera violenta la entrada de la compañera a su centro de trabajo.

No es casual que haya sido precisamente la mencionada compañera el primer blanco de las autoridades, pues su trayectoria ha sido de lucha incansable en defensa de los derechos laborales y sindicales. Así, recientemente había encabezado, como candidata a Secretaria General, la Planilla Azul en las elecciones para Comité Ejecutivo de la Sección 2; dicha planilla, que contaba con un amplio apoyo de las bases, perdió por escasa diferencia de votos ante los "charros".

La solidaridad del conjunto de los trabajadores del DIF no se ha hecho esperar, en contraste con la indignante pasividad de los "representantes sindicales", esto es, del Comité Ejecutivo de la Sección 2 y del Comité Ejecutivo Nacional que, una vez más, demuestran su incondicionalidad ante las autoridades.

Así, tanto la Corriente de Unidad y Democracia Sindical (CUDS), que es la única corriente sindical democrática organizada, como el resto de los trabajadores del DIF han iniciado una campaña política por la reinstalación de la compañera y contra la política represiva de las autoridades del DIF.

Por lo tanto, hoy más que nunca los sindicatos democráticos y los partidos de los trabajadores debemos brindar la más amplia solidaridad a este movimiento, pues las autoridades no descansarán en su empeño por deshacerse de los trabajadores más avanzados y pertenecientes a organizaciones políticas de izquierda. Desde hoy responsabilizamos a las autoridades y al gobierno de la integridad física tanto de la compañera Lilia Irrizari como del resto de los trabajadores democráticos del DIF. ■

Trabajadores del INMECAFE en Atoyac conquistaron 44 bases

Por Salvador Ruíz Fierro

Atoyac, Guerrero. A base, fundamentalmente, de organización y movilizaciones, los trabajadores de base y eventuales miembros de la Sección Ocho del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Café (SNTIMC) obligaron a las autoridades a reconocer la base a cuarenta y cuatro trabajadores.

Desde hace algún tiempo, el INMECAFE empezó a dar de baja a todos los trabajadores eventuales, incluidos cuarenta y ocho que según un convenio firmado entre el INMECAFE y el sindicato tenían derecho a la base. Cuando los trabajadores acudieron a las autoridades, el director les dijo que las bases se darían única y exclusivamente a los trabajadores que fueran necesarios. Desde este punto de vista, por lo menos la mitad de los eventuales no obtendrían la base.

Más adelante, ante la visita de Manuel Aguilera Gómez, Director General del INMECAFE, a Atoyac, los trabajadores de la Sección 8 se organizaron en un Comité de Lucha paralelo al Comité Ejecutivo Seccional. Este Comité de Lucha era necesario para integrar a los eventuales en el órgano que iba a negociar.

El día de la visita, el Comité de Lucha entregó a Aguilera un pliego petitorio y consiguió que éste enviara al Subdirector General del INMECAFE a dialogar con los trabajadores. Ante la presión ejercida por los trabajadores, los boletines pegados en lugares visibles de la empresa y la presencia física de los mismos despedidos, este señor no tuvo más remedio que reconocer a cuarenta y cuatro de las cuarenta y ocho bases. Asimismo, a los que no les fue reconocida la base se les indemnizará de acuerdo con la ley.

En Monterrey, se realizó el Décimo Pleno Nacional del FNCR

Por Pedro Peñaloza

El pasado 5 de julio se celebró en Monterrey, Nuevo León, el Décimo Plenario del Frente Nacional contra la Represión (FNCR), cuyo objetivo central fue analizar el curso que, en los últimos dos meses, ha tomado la represión en el país, así como discutir y organizar las tareas inmediatas que permitan enfrentar con acciones unitarias la política represiva del régimen.

La Coordinadora Nacional del FNCR presentó un documento que incluye tanto un análisis de las manifestaciones actuales de la represión gubernamental como propuestas de acción, y que fue aprobado por unanimidad. El análisis de la represión está dividido por sectores sociales, esto es, cómo afecta respectivamente al sector campesino, al sector urbano y popular, al sector sindical y obrero en general, y al sector estudiantil. El análisis puso de manifiesto que la represión gubernamental ha adquirido nuevas formas, formas que han ido desde la incrustación de provocadores en las filas de algunos sectores sociales en lucha —lo ejemplifica claramente el caso del Comité de Defensa Popular de Chihuahua— hasta la promoción de grupos supuestamente fascistas, como las brigadas 15 y 16 de septiembre, que han amenazado de muerte a algunos dirigentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y, en general, del FNCR, particularmente a la compañera Rosario Ibarra de Piedra.



El FNCR ha decidido realizar un nuevo foro de denuncia de la represión en diciembre de este año.

Al respecto, la apreciación del FNCR es firme: no es posible admitir que el gobierno mexicano se encuentra al margen de las amenazas y acciones de estos grupos.

Por lo que respecta a las actividades, se acordó organizar una manifestación de carácter nacional el próximo 28 de agosto, fecha en que, desde su constitución, el Comité pro Defensa de Presos, Desaparecidos, Perseguidos y Exiliados Políticos realiza diversas actividades para presionar dentro de la coyuntura política que representa el informe presidencial del primero de septiembre. Se trata de unificar a todas las fuerzas democráticas en torno a la exigencia de dos demandas centrales: la presentación de los secuestrados políticos, y el cese de la represión al movimiento sindical y popular. Por estas consideraciones básicas se acordó extender la invitación al mayor número de fuerzas democráticas posible, entre otras especialmente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" (CNPA) y a la Coordinadora de Movimientos Populares.

De paso, vale la pena comentar una discusión que tuvo lugar en este pleno en relación a quién sería el maestro de ceremonias de la marcha del 28 de agosto. Desgraciadamente, en dicha discusión de nueva cuenta salió a relucir el profundo desconocimiento que existe al interior de algunas organizaciones en torno al movimiento homosexual, ya que algunas de ellas se opusieron a que uno de los moderadores fuera un representante del grupo homosexual LAMBDA. Su oposición, basada en una mezcla de populismo y sexismo, realmente es lamentable, ya que las organizaciones homosexuales, como integrantes del FNCR, tienen los mismos derechos que cualquier otra y no hay razón para que sean subestimadas o menospreciadas. No obstante, finalmente, en reñida votación se acordó que un representante de LAMBDA y un representante estudiantil moderaran el acto.

Otro punto a destacar es el referente a la realización del Segundo Foro Nacional de Denuncia de la Represión, que se resolvió celebrar los días 8 y 9 de diciembre próximo, y que culminará con una marcha nacional el 10 de diciembre. En dicho foro se levantará un juicio tanto legal como político en contra del gobierno mexicano.

Al final, se acordó ratificar a la Coordinadora Nacional del FNCR, no sin la advertencia de que durante el próximo pleno se deberá observar el cumplimiento de las tareas de cada una de las organizaciones que la integran. Al respecto, se prevé que, dada su inconsistencia, en el próximo pleno algunas de ellas tendrán que dejar de formar parte de la coordinadora.

Importante triunfo democrático de trabajadores del IPN

Por Angel Angeles

El pasado 12 de junio, en asamblea delegacional, los trabajadores no docentes de las distintas escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ubicadas en el Casco de Santo Tomás eligieron nuevo Comité Ejecutivo de la Delegación D-III-48, Sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Superando todas las maniobras que opusieron los "charros" del Comité Ejecutivo saliente, los miembros de la Planilla Amarilla, a su vez militantes de la democrática y combativa Coordinadora de Trabajadores del IPN, obtuvieron un rotundo triunfo. En la propia asamblea, los integrantes de la planilla electa protestaron como nuevo Comité Ejecutivo.

No obstante lo anterior, en una maniobra más, los "charros" se niegan a dar el reconocimiento oficial a los integrantes de la Planilla Amarilla.

Por su parte, éstos han hecho un llamado a todas las fuerzas democráticas y populares a apoyar su justa demanda de reconocimiento, al tiempo que han empezado a buscar los métodos de lucha adecuados que les permitan obtenerlo.

El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) manifiesta públicamente su apoyo a la demanda de la Planilla Amarilla de ser reconocida oficialmente como nuevo Comité Ejecutivo. ■

El FNCR exigió amnistía general y fin a la represión en Guerrero

Se realizó la entrevista con autoridades guerrerenses

Por Antonio Hernández *

Tras haber sido pospuesta en varias ocasiones la entrevista de la sección Guerrero del Frente Nacional contra la Represión (FNCR) con las autoridades gubernamentales de la entidad, el pasado 6 de julio una comisión integrada por más de treinta compañeros —entre miembros de la Coordinadora Nacional y la sección Guerrero del FNCR— se reunió con el Secretario General de Gobierno, con el Procurador y el Subprocurador de Justicia, y con el Director de Gobernación del Estado de Guerrero, a fin de plantear de nueva cuenta las principales demandas del FNCR y exigir una solución satisfactoria.

Amnistía general e irrestricta

Durante la entrevista el tema debatido con mayor amplitud fue el de la amnistía general e irrestricta, demanda que constituye, sin lugar a dudas, el eje básico del FNCR. La mitad de las dos horas y media que duró la entrevista se ocupó en presentar inumerables elementos de juicio que, una vez más, permitieron demostrar la vigencia de esa demanda. En este primer punto, cuando la comisión del FNCR planteó el caso de los desaparecidos por motivos políticos, los representantes del gobierno del estado estuvieron a punto de romper las pláticas. Y es que en Guerrero, más especialmente que en el resto del país, la amnistía general y la presentación de los secuestrados políticos resultan un problema bastante espinoso para las autoridades gubernamentales, tanto por su crudeza como porque organismos nacionales e internacionales han demostrado hasta la saciedad la ilegal detención y la posterior desaparición de disidentes políticos que se producen. En esta oportunidad, de nueva cuenta se presentó a las autoridades gubernamentales la relación de los 355 desaparecidos de Guerrero, además de que se les entregó una lista de diez agentes —o delincuentes— que realizaron detenciones ilegales de compañeros que aún no han sido presentados públicamente, lista que incluye nombre, apodo, rango y corporación militar o policiaca a la que se encontraban adscritos en ese momento. También se proporcionaron testimonios escritos y verbales acerca de compañeros desaparecidos vistos aún con vida en cárceles clandestinas o en prisiones militares del estado e, incluso, se presentó el testimonio de un compañero que consiguió escapar de uno de esos centros ilegales de reclusión.

Ante el peso de la argumentación y las pruebas mostradas, el Secretario General de Gobierno intentó evadir infructuosamente el tema, al señalar que continuarían las investigaciones para dar con el paradero de los desaparecidos y, en su caso, castigar a los responsables de la detención ilegal y las torturas. A continuación, pasó a hablar de una eventual ley de amnistía que podría beneficiar a los seis presos políticos guerrerenses y sobre la que se tendría noticia el próximo mes de septiembre. La respuesta de los compañeros de la sección Guerrero y de la Coordinadora Nacional del FNCR fue tajante: en Guerrero el gobierno podrá hablar de amnistía sólo si ésta incluye también a los desaparecidos políticos, ya que para el FNCR tan importante como lograr la liberación de los seis presos políticos



Acciones como la marcha nacional por la presentación de los desaparecidos realizada en Atoyac han hecho retroceder al gobierno de Guerrero.

guerrerenses (entre ellos Aquilino Lorenzo, Juan Islas y Arturo Gallegos, miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores —PRT) es conseguir la presentación de los 355 desaparecidos por motivos políticos que hay en el estado. Aún más, el FNCR planteó su interés y el de varios organismos internacionales de que los desaparecidos sean rescatados con vida, y de que esto se logre en un breve plazo. En ese sentido, el Secretario General de Gobierno se vio obligado a afirmar que en la próxima entrevista —a realizarse en el mes de septiembre— informaría acerca de los compañeros que pudieran ser amnistiados independientemente del lugar donde se encontraran recluidos.

Sin temor a equivocarse, los avances conseguidos en este punto se deben en gran medida al impulso que se ha dado a la lucha por la amnistía general en el Estado de Guerrero y que se ha expresado en las jornadas de abril pasado, en la marcha unitaria del 18 de mayo en Atoyac, en el reaglutinamiento de los familiares de desaparecidos tanto en Atoyac como en Acapulco y Chilpancingo, en la permanente movilización de los universitarios en torno a esa demanda y en las últimas actividades del FNCR ante organismos como Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que dentro de pocas semanas realizarán una encuesta en México. Sin embargo, el trecho a recorrer aún es largo, y por ello el FNCR acordó en su décimo plenario nacional realizado el pasado 4 de julio en Monterrey, Nuevo León, una serie de medidas que permitan ampliar y fortalecer las fuerzas políticas y sociales dispuestas a luchar para arrancar una solución nacional respecto a los desaparecidos políticos.

Investigación sobre los restos localizados en Copacabana

Otra exigencia planteada a los funcionarios gubernamentales del Estado de Guerrero fue la de que se esclarezca la identidad de los restos humanos localizados en Copacabana, Acapulco, sitio donde funcionó uno de los principales centros de tortura durante el periodo de mayor actividad contraguerrillera, es decir, de 1973 a 1975. El informe proporcionado por el Procurador de Justicia fue, por decir lo menos, absurdo, al indicar que los restos son investigados por antropólogos en el Distrito Federal. Con mayor habilidad, el Secretario General de Gobierno pretendió explicar el hecho arguyendo la existencia de mayores facilidades técnicas en la capital y eludió el hecho indicando que aún no obran en su poder los resultados de la supuesta investigación. Ante esto, el FNCR exigió que una comisión de especialistas, designada por el frente mismo, estudie los restos, dado el cúmulo de evidencias en el sentido de que en Copacabana se ocultaron los cadáveres de compañeros disidentes muertos en la tortura. Luego de una respuesta afianzada en evasivas, el Secretario General de Gobierno se comprometió a resolver el asunto en la próxima entrevista con el FNCR.

Los militares, a sus cuarteles

Igual escozor provocó a las autoridades la exigencia del FNCR de que los militares no continúen trastornando las actividades de la población civil. En ese sentido, se demandó tanto la supresión de los retenes militares como el fin de las incursiones del ejército en las poblaciones del estado y de las detenciones de civiles que cotidianamente efectúan los militares en la región. Para los representantes del gobierno resultó demasiado embarazoso tener que admitir —así haya sido de manera velada— que un gobierno estatal se encuentra imposibilitado para hacer cumplir la ley a los militares. La "solución" planteada por el Secretario General de Gobierno fue la de entablar pláticas con el presidente de la república al respecto, pues hizo hincapié en que la respuesta dependería, única y exclusivamente, de una decisión presidencial.

Los colonos de El Anfiteatro no se mueven

En la segunda parte de la entrevista, el FNCR y el Consejo General de Colonias Populares de Acapulco (CGCPA) protestaron por las diversas medidas que el gobierno del estado ha implementado en contra de los colonos de El Anfiteatro de Acapulco, como el cerco tendido por la policía, las amenazas de desalojo, el corte de energía eléctrica ordenado por el Fideicomiso Acapulco, el impedimento del transporte de materiales destinados a la reparación de las casas no desalojadas y, en suma, el permanente acoso y hostigamiento de parte de distintos organismo oficiales. Asimismo, basados en estudios hechos por especialistas de la Escuela de Arquitectura de la UNAM, dieron a conocer la viabilidad de urbanizar buena parte de El Anfiteatro, y exigieron una solución a sus demandas de seguridad en la tenencia de sus predios y de urbanización de la zona. Para tratar más ampliamente el asunto, las autoridades se comprometieron a estar presentes al día siguiente, 7 de julio, en Acapulco para entrevistarse con una comisión del CGCPA a fin de resolver algunos de los problemas planteados.

La respuesta de los funcionarios gubernamentales fue similar ante las exigencias de dos comunidades de la zona montañosa de Tlapa, que demandaron la libertad de dos campesinos presos acusados de despojo y homicidio, así como el respeto a su derecho a trabajar tierras comunales actualmente en poder de un cacique local y el respeto al resultado de las elecciones de comisariado ejidal. Así, los compañeros fueron citados para horas más tarde a fin de avanzar en la solución de sus demandas. No obstante, respecto a la libertad de los dos campesinos presos se obtuvo el compromiso gubernamental de incluirlos en la próxima amnistía.

Copalillo: contra la imposición y por nuevas elecciones

Para concluir la entrevista, una representación de los habitantes del Municipio de Copalillo se manifestó en contra de la imposición que en días pasados realizaran el gobierno del estado y el Congreso Local de un Concejo Municipal espurio en sustitución del ayuntamiento que la población de Copalillo había electo democráticamente. Abundando al respecto, la comisión hizo mención de cómo miles de copalillenses han repudiado públicamente al concejo impuesto y hasta qué grado de aislamiento ha llegado éste. Como prueba de ello, la representación mencionó que, a pesar de múltiples promesas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sólo logró movilizar a cuarenta habitantes del municipio —de un total de 13 mil— en una manifestación de supuesto apoyo al Concejo Municipal impuesto, a la que además asistieron algunos diputados locales, y los presidentes municipales y miembros de cabildos de zonas aledañas.

Al respecto, las demandas fueron muy claras: que el ejército deje de incursionar en el municipio y que se respete la decisión de la población convocando a nuevas elecciones. En este punto, la respuesta de las autoridades fue la de investigar el grado de aislamiento con respecto a la población del Concejo por ellos impuesto y resolver sobre la convocatoria a nuevas elecciones en una nueva entrevista con esta representación a realizarse el 17 de julio. No obstante, por lo pronto, las autoridades se comprometieron a evitar la presencia intimidatoria del ejército en Copalillo.

En apoyo, y ante el evidente respaldo de la población copalillense a la demanda de elecciones extraordinarias en el municipio, la Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" (CNPA) resolvió convocar a una marcha que se habrá realizado el 16 de julio en la ciudad de Chilpancingo. De igual forma, la CNPA hizo suyas todas las demandas del FNCR en Guerrero, en especial la referente a la presentación de los desaparecidos por motivos políticos. ■

* Ex preso político y actualmente militante del PRT.

Combativo encuentro nacional campesino

Resoluciones del Encuentro Nacional de Solidaridad con el Pueblo de Sinaloa

(A continuación reproducimos la resolución adoptada por el Encuentro Nacional de Solidaridad con el Pueblo de Sinaloa convocado por la Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" y celebrado recientemente en la Comunidad de Mojolo, Sinaloa.)

El 11 y el 12 de julio, delegaciones de más de veintiocho organizaciones y grupos campesinos, de estudiantes y de colonos de las distintas partes de Sinaloa —apoyadas por representantes campesinos de otros estados del país— acudimos a celebrar el Encuentro Nacional de Solidaridad con el Pueblo de Sinaloa, convocado por la Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" (CNPA).

Con profundas y abundantes intervenciones de los asistentes, llegamos unánimemente a los siguientes acuerdos y consideraciones:

1. Rechazar el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), en tanto que está diseñado para golpear al ejido y las comunidades, para favorecer a los latifundistas escudados como supuestos pequeños propietarios, y que se orienta hacia los cultivos de exportación pretendiendo, en forma engañosa, convencer al pueblo de que busca resolver el problema alimenticio. En contraposición al SAM, lucharemos por la puesta en marcha de una profunda reforma agraria radical, que destruya al latifundio totalmente y entregue la tierra a los campesinos pobres.

2. Rechazar y exigir la derogación de la Ley de Fomento Agropecuario (LFA) y de la Ley del Quinto Esquerra, ya que ambas sólo son instrumentos que fomentan al SAM, ponen las tierras ejidales y comunales en manos de los capitalistas, castigan descaradamente al campesinado con cárcel si éste opta por formas de lucha que a juicio de los latifundistas y el gobierno violenten la paz social, quienes pueden encarcelar a dirigentes materiales e intelectuales de tomas de tierra hasta por seis años.

Hoy, por lo menos tres campesinos del Ejido Rosamorada y un comunero de Mojolo se encuentran presos, además de que existen cuarenta órdenes de aprehensión en contra de otros tantos comuneros y ejidatarios en distintos lugares del Estado de Sinaloa. Exigimos la libertad inmediata e incondicional de los compañeros Abel Olivas González, Daniel Vázquez Bastidas y Antonio Angulo Angulo —presos en la cárcel pública del Municipio de Mocorito, Sinaloa—, y del compañero Horacio Medina Medina —preso en Culiacán, Sinaloa.

3. Impulsar la sindicalización de los obreros agrícolas en forma libre, independiente y democrática luchando contra los latifundistas y los dirigentes traidores, tanto de los sindicatos blancos como de los "charros".

4. Convocar para mediados de septiembre al Primer Encuentro Estatal de Organizaciones y Grupos Campesinos Independientes de los latifundistas y el gobierno, con el propósito de dar pasos firmes encaminados a romper con la dispersión del campesinado y sus luchas, que hoy se presenta como la debilidad más importante.

Para ello fue nombrada una Comisión Organizadora, integrada por la Comunidad Agraria de Mojolo, la Coordinadora Regional Campesina de Angostura, la Coordinadora del Sur de Sinaloa, la Unión de Ejidos Independientes de Sinaloa, y la Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos de Sinaloa.

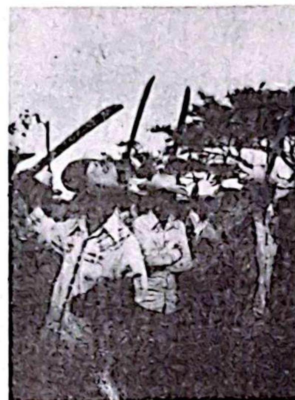
5. Apoyar las tomas de tierra que hasta hoy se han producido, como las sostenidas por los comuneros de Mojolo, los solicitantes del grupo "El Guerrero", los ejidatarios de El Salto, los ejidatarios del Nuevo Centro de Población de Costa Rica y los ejidatarios de Carricitos, en los municipios de Culiacán, Sinaloa de Leyva, Mocorito y Salvador Alvarado, respectivamente.

6. Respaldar, apoyar y participar en la Jornada Nacional contra la Represión al Movimiento Campesino Independiente que la Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" ha planteado. Dicha jornada se inició con la histórica y multitudinaria Marcha Nacional Campesina Magisterial que se realizó en la Ciudad de México el pasado 12 de mayo. Entre las actividades que se han contemplado están las siguientes:

Conferencia Nacional de Solidaridad con las Luchas Campesinas y contra la Represión, la cual ha sido convocada para el próximo 20 de julio a las 16:00 horas en el Auditorio Principal de la Escuela Normal Superior (ENS), en la Ciudad de México. Dicha conferencia será también un foro de denuncia y de condena a la política represiva y anticampesina del régimen lópezportillista.

Manifestación en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, el 16 de julio en apoyo a la comunidad de Copalillo, Guerrero, y para exigir la libertad de todos los presos políticos, la presentación de más de 350 "desaparecidos" por motivos políticos en ese estado, el cese de la represión contra los colonos del Anfiteatro de Acapulco, Guerrero, y el retiro de los retenes militares que existen en el Estado de Guerrero.

Manifestación en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, el 22 de julio en apoyo al pueblo juchiteco y a la



Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI); para exigir el cese de la represión que contra las comunidades indígenas se ejerce de manera cotidiana por parte de los pistoleros, la policía y el ejército; para exigir la libertad inmediata e incondicional de más de treinta compañeros encarcelados en las cárceles de Putla y Juxtlahuaca —Municipio de Copala, Oaxaca—, en Teotitlán del Camino, Oaxaca, para exigir la presentación de los "desaparecidos", entre los que se encuentra el compañero Víctor P... Henestrosa, así como la liberación del compañero Leopoldo de Gyves, recluido en el Campo Militar Número Uno. Se exigirá al gobierno de Pedro Vázquez Colmenares una investigación sobre el asesinato de más de 500 indígenas triquis en los últimos diez años.

Manifestación en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en apoyo a las luchas campesinas del Estado de Sinaloa; para exigir la inmediata derogación de la Ley del Quinto Esquerra y la liberación de todos los presos políticos; y para repudiar la política anticampesina y represiva de Antonio Toledo Corro.

Todas estas actividades forman parte de los preparativos del Cuarto Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas Independientes, el cual se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto en la Colonia Alvaro Obregón en el Municipio de Juchitán, Oaxaca. Dicho encuentro ha sido convocado por la CNPA.

7. Apoyar la lucha que desarrollan los pueblos hermanos de El Salvador y Guatemala; condenar al gobierno del dictador guatemalteco Romeo Lucas por el virtual asesinato de más de 400 campesinos guatemaltecos que fueron deportados por el gobierno mexicano, al cual no sólo se le condena por dicha deportación, sino que se le exige otorgue inmediatamente asilo político a los más de 4 mil campesinos guatemaltecos que se encuentran en la frontera, en territorio mexicano, huyendo del ejército asesino de Guatemala. Porque México debe dar protección a todos los que luchan del lado del pueblo, como lo hacen hoy miles de guatemaltecos y salvadoreños. ■

Sinaloa: comienzan a gestarse confrontaciones importantes

Por Armando Castilla

Antonio Toledo Corro —latifundista, concesionario de la empresa imperialista John Deere y ex Secretario de la Reforma Agraria— fue "electo" como gobernador del Estado de Sinaloa con una votación apenas superior al treinta por ciento del total de votantes consignados por el padrón electoral de dicho estado. Así pues, de principio, el actual gobierno de Sinaloa es, a todas luces, un gobierno totalmente minoritario, impuesto con un profundo rechazo, así sea pasivo, de la población. Durante su breve periodo de funciones, más de 150 expedientes agrarios han quedado concluidos y el gobierno sólo espera el momento oportuno para ejecutarlos. Pero resulta que más del ochenta y cinco por ciento de las resoluciones son contrarias a los intereses de los campesinos. Asimismo, todas las cooperativas pesqueras del estado —que representan el núcleo de este tipo más importante del país— se encuentran en una crisis total, con grandes déficits financieros arrastrados durante años, a lo que se aúnan el abandono creciente de sus integrantes y el desinterés de éstos por formar otras nuevas.

Por otra parte, en 1980 se llevó a cabo la más grande migración del campo a las ciudades (hoy, en Sinaloa más del cincuenta y dos por ciento de la población se encuentra concentrada en las zonas urbanas), lo que muestra la profundidad de la crisis en el campo. No obstante, dado que en su mayoría las ciudades más importantes del estado no han podido ser industrializadas, el campo continúa siendo el centro de producción fundamental.

Los grandes latifundistas se encuentran asociados al capital extranjero, sobre todo en lo referente a los cultivos de exportación. Puesto que este rubro se encuentra a merced del mercado internacional, sobre todo el del sur de Estados Unidos, la necesidad de abaratar los costos ha llevado a aquéllos a introducir maquinaria ahorradora de mano de obra con el consiguiente desplazamiento de trabajadores. De esta forma, muchos trabajadores agrícolas que no han podido ser absorbidos por los campos norteamericanos han tenido que regresar a engrosar las filas de desempleados en nuestro país.

En Sinaloa, como en otras regiones del país, todos los grupos económicos se han mezclado y quienes monopolizan la producción agrícola controlan al mismo tiempo áreas importantes del comercio y las finanzas, de manera que ha surgido un poder financiero de gran importancia que se manifiesta en el fortalecimiento de todos los bancos en el estado.

En contraposición, el campesinado pobre, y los asalariados del campo y la ciudad se encuentran cada vez más hambrientos y desesperados, lo que ya anuncia un caudal de fuertes y constantes confrontaciones entre ellos y los explotadores.

Los dueños del capital, con Toledo Corro a la cabeza, han iniciado una fuerte ofensiva contra los trabajadores, los colonos y los campesinos, con el firme propósito de evitar que éstos se organicen con independencia del estado y de los partidos de los explotadores.

Sin embargo, todos los sectores dan muestras de su radicalización. Así, miles de sinaloenses de casi todos los sectores sociales han manifestado públicamente, como en la manifestación del pasado 30 de junio que congregó a cerca de 30 mil personas en Culiacán, su repudio a la intentona gubernamental de separar a las preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Asimismo, miles de campesinos pobres han empezado a fijar plazos para la resolución definitiva de sus demandas y algunos han empezado a tomar la tierra por sus propias manos, como es el caso de los comuneros de Mojolo en el Municipio de Culiacán, quienes han recuperado más de mil 500 hectáreas que les habían sido arrebatadas, a pesar de poseer títulos y planos comunales desde 1887, por caciques y latifundistas como el ingeniero González de los Monteros (compadre de Toledo Corro). Con el fin de apoyar su lucha, los días 11 y 12 de julio se habrá realizado en dicha comunidad un encuentro nacional de solidaridad convocado por la Coordinadora Nacional "Plan de Ayala".

También en el norte del estado, para cuando la presente nota aparezca se habrán realizado otras tomas de tierra. De igual forma, miles de trabajadores agrícolas han empezado a luchar por su sindicalización, lo que ha permitido que las organizaciones de izquierda hayan empezado a enraizarse entre estos trabajadores.

Por otro lado, en Mazatlán se ha formado el Frente de Defensa Popular, integrado particularmente por colonos, que además de luchar contra el aumento de las tarifas de los servicios urbanos ha realizado una toma de tierra para la conformación de una nueva colonia.

Sin embargo, los explotados aún mantienen un importante grado de dispersión que está siendo aprovechado por el gobierno. Por ello, las organizaciones del campesinado pobre y de los trabajadores en general debemos coordinar esfuerzos para conseguir la centralización de las fuerzas obreras y campesinas, y así enfrentar en mejores condiciones a la política gubernamental y a los dueños del capital.